



CONFLICTOS Y CRISIS: UN MUNDO EN DESORDEN





Manifestación en reclamo del fin del genocidio en Gaza en Washington, DC, Estados Unidos, el 13 de enero de 2024.

Foto de Andrew Caballero-Reynolds/AFP vía Getty Images.

UN MUNDO DE CONFLICTOS

Demasiadas personas en diferentes partes del mundo no pueden dar por segura la satisfacción de sus necesidades más básicas. Cuando despiertan por la mañana no pueden dar por sentado que vivirán otro día. No pueden dar por seguro el acceso a agua limpia o a alimentos. En caso de lesión o enfermedad, no está garantizado que reciban atención médica. Tampoco pueden acceder a información confiable sobre el conflicto al que intentan sobrevivir, ni pueden contarle al mundo su historia. No pueden confiar en que sus gobiernos las protegerán, ya que en muchos casos es el propio gobierno el que las agrede. Tampoco pueden depositar su fe en la ayuda de la comunidad internacional. Si se ven obligadas a huir, no están seguras de encontrar compasión.

En todo el mundo, **una de cada seis** personas está expuesta a conflictos. Las muertes relacionadas con conflictos están en su pico **más alto en décadas**. En 2023 la cantidad de víctimas civiles aumentó **62%** respecto de 2022. La desescalada no parece inminente: el gasto militar global alcanzó la **cifra récord** de USD 2,2 billones el año pasado.

El asalto de Israel a Gaza ha sacudido al mundo. Es urgente poner fin a la matanza, pero incluso después de un alto el fuego, las consecuencias

del conflicto se sentirán durante décadas. Habrá que lidiar con un trauma generacional y la tarea de reconstrucción física será inmensa. También será necesario un enorme esfuerzo internacional para obligar a los responsables de las grotescas violaciones de derechos humanos a rendir cuentas.

Gaza es el escenario del conflicto más espantoso de la actualidad, que amenaza con extenderse a toda la región, pero, por desgracia, dista mucho de ser el único. Además, Rusia sigue librando su mortífera guerra contra Ucrania; en Sudán, la población civil padece los enfrentamientos entre militares y milicias; y a tres años después del golpe militar, un conflicto sangriento se ha desatado en Myanmar. Incluso en lugares donde supuestamente la guerra ha terminado, como en Etiopía y Nagorno-Karabaj, continúan la violencia, las violaciones de derechos y la impunidad.

Además de las víctimas y heridos inmediatos, los conflictos causan enormes daños ambientales y climáticos. Se estima que las fuerzas militares representan el **5,5%** de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, equivalentes a las del **cuarto país** con mayor emisión en el mundo. El Acuerdo de París no obliga a los Estados a declarar sus emisiones militares, y prácticamente ninguno elige



EL GASTO MILITAR GLOBAL ALCANZÓ LA CIFRA
RÉCORD DE USD 2,2 BILLONES



1 DE CADA 6 PERSONAS ESTUVO EXPUESTA A
CONFLICTOS



LAS VÍCTIMAS CIVILES AUMENTARON 62%



AL MENOS 167.800 PERSONAS MURIERON EN
CONFLICTOS, MÁS DE 30.000 DE ELLAS EN GAZA



MÁS DE 114 MILLONES DE PERSONAS SE ENCUENTRAN
ACTUALMENTE DESPLAZADAS



CASI 300 MILLONES NECESITAN PROTECCIÓN Y AYUDA
HUMANITARIA

hacerlo, lo que dificulta la tarea de la sociedad civil de presionar a los Estados para que las reduzcan. La sociedad civil insta al desarme para salvar vidas humanas, hacer realidad los derechos humanos y proteger el clima y el planeta.

La sociedad civil trabaja en todos los frentes posibles para abordar los conflictos. Presta servicios esenciales, brinda protección, ayuda a las personas obligadas a abandonar sus hogares, comparte información, insta al cese del combate, exhorta a la comunidad internacional a actuar, exige justicia por los crímenes contra los derechos humanos y aboga por la desescalada, el desarme y la consolidación de la paz.

Por desempeñar estas funciones, la sociedad civil es atacada por los beligerantes. En muchos casos, soldados y rebeldes atacan directamente a quienes intentan brindar ayuda humanitaria vital. Los periodistas que intentan compartir verdades sin ambages también están bajo fuego: en 2023, **99 periodistas y trabajadores de medios** fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones. Los autores de la violencia están violando leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos largamente establecidas, confiados en que gozarán de impunidad ► **VÉASE CAPÍTULO**. La sociedad civil reclama el fin de los conflictos y aboga por la educación en la prevención de la violencia, la protección de los derechos y la construcción de la paz.

Gaza: la matanza que no cesa

La masacre es implacable. A excepción de una breve pausa en noviembre, los bombardeos israelíes sobre Gaza han sido incesantes. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones para un segundo alto el fuego temporario: más allá de la urgente necesidad de esta pausa, el asalto debe cesar de forma definitiva.

Ya han muerto unas 30.000 personas y casi toda la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares. Se trata de una tragedia que dejará una marca indeleble.

La decisión de Israel de bombardear el pequeño territorio densamente poblado de Gaza no podía sino resultar en pérdidas civiles masivas. Las fuerzas israelíes han reducido a escombros la mayor parte del territorio. Sus habitantes, obligados a huir en repetidas ocasiones, fueron conducidos al sur, hacia zonas que, según les habían dicho, serían seguras, pero que igual fueron bombardeadas por Israel. Israel podría lanzar una nueva ofensiva terrestre en cualquier momento. La gente está atrapada contra una frontera cerrada.

La atrocidad de los ataques perpetrados por Hamas y otros grupos en Israel el 7 de octubre es innegable. Los responsables de estos actos merecen ser llevados ante la justicia y los rehenes deben ser liberados. Sin embargo, la respuesta de Israel constituye claramente un castigo

colectivo, ya que penaliza a toda una población por actos cometidos por algunos de sus miembros. Esta estrategia presupone la culpabilidad de los habitantes de Gaza simplemente por su identidad y lugar de residencia. Esto es un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra. Israel responsabiliza a la población civil porque no hizo nada por detener un ataque que tomó a todos por sorpresa. El 7 de octubre, la población civil de Gaza estaba simplemente tratando de vivir su vida cotidiana en circunstancias ya increíblemente difíciles. Ellos no son los culpables.

La guerra de Israel contra Gaza parece no ser más que una sanguinaria campaña de venganza del primer ministro Benjamín Netanyahu, y puede que no sea una coincidencia que el estado de guerra sea su única forma de asegurar su supervivencia política.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil para implementar una respuesta humanitaria, el gobierno israelí continúa obstaculizando el suministro de ayuda. Gran parte de la ayuda internacional permanece bloqueada en la frontera, desafiando la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) de diciembre y las órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitidas en febrero de 2024, que ordenan a Israel permitir el pleno acceso de la ayuda humanitaria ► **VÉASE CAPÍTULO**. Como era de esperarse, las consecuencias incluyen un aumento del hambre, la escasez de agua potable y problemas de salud cada vez mayores, ya que la mayoría de los hospitales han sido destruidos.

El trabajo humanitario es peligroso: **al menos 167** trabajadores humanitarios han muerto, la cifra más alta de todos los conflictos de este siglo. Informar sobre el conflicto también conlleva riesgos significativos. Más del **75%** de los periodistas y profesionales de los medios de comunicación asesinados en 2023 murieron en Gaza en tan solo unos meses.

Palestinos e israelíes necesitan desesperadamente a la sociedad civil y su capacidad para brindar ayuda, apoyar la consolidación de la paz y exigir rendición de cuentas. Sin embargo, la primera reacción de muchos donantes ha sido obstaculizar el trabajo del activismo. Tras los atentados del 7 de octubre, varios Estados europeos **suspendieron o**

anunciaron la revisión de su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Palestina e Israel.

Lo hicieron sobre la base de evidencia, frágil en el mejor de los casos, de que los fondos podrían ser desviados hacia el terrorismo, o en función de la errónea equiparación de la crítica de las acciones del Estado de Israel con el antisemitismo. Este hecho profundamente preocupante ha favorecido al gobierno israelí, que durante mucho tiempo ha restringido y obstaculizado las actividades de la sociedad civil.



La sociedad civil está sitiada. Durante 30 años, la ocupación israelí ha socavado el trabajo de las OSC, impidiendo que desempeñen su rol en la promoción de desarrollo autónomo, cambio político y el fin de la ocupación de Cisjordania y Gaza. En los últimos años, el gobierno de ocupación se ha vuelto más explícito en la represión de las OSC, clausurándolas, confiscando sus bienes y deteniendo a su personal. La ocupación también impone restricciones al financiamiento de las OSC. Las condiciones políticas impuestas por donantes europeos y, sobre todo, estadounidenses, han llevado a cientos de OSC a suspender sus actividades.



ABDALAZIZ ALSALEHI
Monitor de Políticas Sociales y Económicas (Al-Marsad)

En todo el mundo, millones de personas han expresado su empatía saliendo a las calles y mostrando su solidaridad con Palestina, exigiendo un alto al fuego y pidiendo a sus gobiernos que presionen a Israel para detener la violencia. Sin embargo, se han enfrentado a la reacción hostil de las autoridades. Los políticos han calificado erróneamente muchas de estas manifestaciones como antisemitas o de apoyo al terrorismo. En el Reino Unido, el entonces ministro del Interior describió a estas manifestaciones como “marchas de odio” y **declaró** que mostrar la bandera palestina o corear eslóganes pro-palestino podría constituir un delito penal.



Foto de Sébastien Salom-Gomis/AFP via Getty Images

protestas pero prohibieron otras. La policía **recurrió a la fuerza** cuando mil personas participaron en una vigilia pro-palestina prohibida en Berlín. En Australia, la policía de Sídney **anunció** que usaría “poderes extraordinarios” para registrar y verificar la identidad de los participantes en una manifestación pro-palestina. Estas violaciones de los derechos de protesta son apenas algunos ejemplos de las respuestas estatales a las manifestaciones en las primeras etapas del conflicto, y han continuado desde entonces.

Las restricciones no se limitan a las protestas. En Estados Unidos, grupos pro-palestinos **reportan** haber sido objeto de acoso e intimidación, mientras que personas críticas del Estado de Israel han sido excluidas de los medios de comunicación y emisoras musulmanas han sido sacadas **del aire**. La libertad académica también está en peligro, ya que algunos donantes adinerados han amenazado con **retirar su apoyo** a universidades cuyo personal y estudiantes sean considerados partidarios de la causa palestina. Las empresas de redes sociales han sido **acusadas** de censurar u ocultar al público publicaciones palestinas y pro-palestinas.

Estas reacciones consolidan esfuerzos de larga data para limitar la capacidad de boicotear a Israel. Durante mucho tiempo el movimiento global de boicot, desinversión y sanciones (BDS) ha abogado por tácticas pacíficas para presionar al Estado de Israel para que respete el derecho internacional de derechos humanos. Estas tácticas son similares a las que contribuyeron al fin del apartheid en Sudáfrica.

La mayoría de los estados de Estados Unidos ya han adoptado **leyes anti-BDS**, a menudo basadas en una ley modelo promovida por grupos de presión proisraelíes, y los esfuerzos continúan para introducir una ley similar a nivel federal. Las autoridades francesas han utilizado una **ley antidiscriminación** para limitar los esfuerzos del movimiento BDS, y en el Reino Unido el gobierno ha **presentado** un proyecto de ley antiboicot que impediría a todo organismo público tomar una decisión de inversión basándose en preocupaciones éticas sobre un país. El proyecto de ley menciona explícitamente a Israel. Estas medidas a menudo equiparan la crítica al historial de derechos humanos de Israel con el antisemitismo, lo cual dificulta la libre expresión.

En **Francia**, el gobierno intentó imponer una prohibición general de las manifestaciones pro-palestinas, pero un tribunal **determinó** que estas protestas sólo podrían ser prohibidas caso por caso. La policía disolvió una manifestación prohibida en París utilizando **gases lacrimógenos y cañones de agua**. En Alemania, las autoridades permitieron algunas

Al asociar la crítica a Israel con el antisemitismo, el proyecto de ley antiboicot, así como la retórica que lo acompaña, disuaden a los defensores de derechos de criticar a Israel por temor a ser tachados de antisemitas. A largo plazo, al enfrentar a los judíos y la seguridad judía con otras luchas por los derechos civiles y humanos, esta ley acabará enfrentando entre sí a las comunidades minoritarias.



DANIEL LUBIN
Na'amod (Judíos británicos contra la ocupación)

A pesar de los desafíos, la sociedad civil global continúa ejerciendo presión sobre las organizaciones internacionales e instando a los Estados a exigir un alto el fuego e instar a Israel a actuar con moderación. Estos esfuerzos han dado frutos. En febrero de 2024, como resultado de una acción legal emprendida por tres OSC, un tribunal **ordenó** al gobierno holandés suspender la exportación de partes para aviones de combate F-35 a Israel. El tribunal determinó que existía un riesgo evidente de que estas partes pudieran utilizarse para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el gobierno holandés ha apelado la decisión. La sociedad civil **ha iniciado** una demanda similar en el Reino Unido, que actualmente está en proceso de apelación tras una decisión inicial del tribunal a favor del gobierno.

Presentamos esta demanda porque ningún gobierno debería permitir transferencias de armas a un Estado que comete crímenes de guerra. El tribunal precisó que no es necesario demostrar las violaciones del derecho internacional: alcanza con que haya un “riesgo claro” de tales violaciones. También rechazó las acusaciones del gobierno de que la información proporcionada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y por los relatores especiales de la ONU no podía ser verificada de forma creíble. Por el contrario, declaró que estas fuentes debían ser tomadas “extremadamente en serio”.



FRANK SLIJPER
PAX, Países Bajos

El impulso para cortar el suministro de armas puede fortalecerse tras la orden provisional de la CIJ. Por ejemplo, la empresa japonesa Itochu Corp **anunció** que terminaría su cooperación con un fabricante de armas israelí debido a la decisión del tribunal.

Se necesitan muchas más acciones de este tipo para evitar que la situación se descontrole aún más. Hay claros indicios de una posible escalada regional. Hezbollah e Israel están intercambiando ataques, y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a embarcaciones en el Mar Rojo están desencadenando respuestas estadounidenses y británicas. Esta escalada debe detenerse. Todos los beligerantes deben atender los continuos llamamientos de la sociedad civil a un alto el fuego inmediato y permanente.



LEER MÁS:

➤ [GAZA: LLAMAMIENTO A UN ALTO EL FUEGO INMEDIATO](#)

Tres años de guerra de Rusia contra Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia entró en su tercer año en febrero de 2024, evidenciando el modo en que acciones militares supuestamente acotadas pueden convertirse en conflictos prolongados. La guerra se ha transformado en una batalla territorial en que los ejércitos luchan por cada centímetro de terreno. Las consecuencias han sido desastrosas para la población civil. Ha habido **más de 10.000 muertos** y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Al igual que en Gaza, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación están pagando un alto precio: **al menos 69** de ellos han sido asesinados hasta la fecha.

Mientras la sociedad civil ucraniana muestra un inmenso esfuerzo voluntario, el activismo ruso enfrenta intensas restricciones.

En Ucrania, la sociedad civil trabaja para **evacuar** a la población civil de las zonas ocupadas, **brindar atención médica** a los heridos y **restaurar** edificios dañados. También documenta los numerosos crímenes cometidos por Rusia y recopila pruebas, con la esperanza de llevar a Vladimir Putin y a su círculo cercano ante la justicia internacional. “Un Tribunal para Putin” (T4P) es una iniciativa de tres OSC ucranianas, entre ellas el Centro para las Libertades Civiles, ganador del **Premio Nobel de la Paz**, que recopila y registra detalles de los delitos contra los derechos humanos. Su objetivo es construir una base de evidencia que pueda ser utilizada por la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos para impartir justicia. En agosto, presentaron a la CPI **pruebas** de actos de genocidio cometidos por las fuerzas rusas en Mariupol.

La sociedad civil ucraniana se está enfocando cada vez más en la lucha contra la corrupción. Esto refleja un creciente interés ciudadano en la gestión financiera de las entidades públicas, especialmente en la gestión de la ayuda internacional, por temor a que el apoyo se agote si los donantes consideran que los fondos no se utilizan adecuadamente. Las iniciativas de la sociedad civil buscan garantizar una reconstrucción sin corrupción, incluso utilizando herramientas en línea para rastrear el gasto público. La **Better Regulation Delivery Office**, un grupo de reflexión independiente de la sociedad civil, investiga y busca prevenir la corrupción en la **reconstrucción y restauración** de edificios.

Al mismo tiempo, la prolongación del conflicto ha afectado inevitablemente la capacidad de respuesta de la población. El voluntariado, que alcanzó un nivel increíblemente alto del 80% de la población en los primeros meses de la guerra, **ha disminuido** a la mitad durante el segundo año. La respuesta de la sociedad civil ucraniana a la guerra requiere de apoyo internacional sostenido.

Mientras tanto, al intentar suprimirla por todos los medios posibles Rusia continúa reconociendo la importancia de la sociedad civil. El suceso reciente más impactante es la sospechosa muerte del líder opositor Alexei Navalny en una colonia penitenciaria del Ártico. Es el último de una **larga lista** de personas que han fallecido repentinamente tras enfrentarse a Putin.

El asesinato perpetrado por el Estado, ampliamente percibido como la causa de la muerte de Navalny, representa la forma más extrema de represión, pero Putin cuenta con muchos otros recursos a su disposición. Uno de ellos es la criminalización de las manifestaciones, que se observó una vez más cuando la gente acudió a **vigilias improvisadas** para conmemorar a Navalny. La policía **detuvo a cientos de personas**.

La organización de derechos humanos OVD-Info **informa** que, desde el inicio de la invasión, las autoridades han detenido a 19.855 personas durante manifestaciones contra la guerra, han iniciado 897 causas penales contra activistas antibelicistas y han introducido 51 nuevas leyes represivas.

Entre **los numerosos rusos** encarcelados por actos simbólicos de protesta, el artista de Crimea Bohdan Zizu **fue condenado** en junio a 15 años de prisión por pintar un edificio con los colores de la bandera ucraniana. En noviembre, un tribunal **condenó** a la artista Alexandra Skochilenko a siete años de cárcel por colocar información sobre la guerra en las etiquetas de precios de los supermercados. Incluso quienes ayudan a refugiados ucranianos que viven en Rusia son criminalizados.

En enero de 2023, las autoridades **declararon** que Meduza, uno de los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en Rusia, sería considerado una “organización indeseable”. Por lo tanto, se le prohibió operar en Rusia y se criminalizó a cualquier persona que compartiera su contenido. En junio, el canal de televisión independiente Dozhd **sufrió el mismo destino**, y otras organizaciones también fueron etiquetadas de la misma manera durante el año.

En enero de 2023, un tribunal **ordenó el cierre** del Grupo Helsinki de Moscú, la organización rusa más antigua de defensa de los derechos humanos, debido a un defecto técnico relacionado con su registro. En agosto, los tribunales **ordenaron** el cierre de otra organización de derechos humanos, el Centro Sájarov. Estos métodos han sido empleados repetidamente por las autoridades para forzar a un número creciente de OSC a disolverse o exiliarse.

El Estado también ha designado a numerosas personas y organizaciones como “agentes extranjeros”, una clasificación destinada a estigmatizarlas y asociarlas con el espionaje. En noviembre, el *Moscow Times* fue añadido a la lista. En febrero de 2024, Putin promulgó una ley que permite al gobierno confiscar dinero y otros bienes de quienes critiquen la guerra. También han aumentado los ataques contra las personas LGBTQI+ como parte de la estrategia del gobierno para avivar un sentimiento nacionalista ► **VÉASE CAPÍTULO.**

El Estado también está criminalizando a los periodistas. En marzo, Evan Gershkovic, periodista del *Wall Street Journal*, fue detenido por espionaje. Ello envió la señal de que ni siquiera los periodistas internacionales están a salvo. La periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva de *Radio Free Europe* también está bajo custodia tras ser arrestada mientras visitaba a su familia en Rusia. Es probable que Putin esté considerando utilizar a los detenidos como medio de presión en el marco de un intercambio de prisioneros. Otros periodistas que trabajan fuera de Rusia también han sido incluidos por las autoridades estatales en listas de personas buscadas o acusadas en rebeldía.

Es difícil esperar un relajamiento de la represión, al menos mientras dure la guerra. En marzo, Putin obtendrá un nuevo mandato a través de elecciones no competitivas. Ningún candidato creíble está autorizado a oponerse a él, y en febrero de 2024 se prohibió la candidatura de un político antibelicista inesperadamente erigido en posible articulador de una alianza opositora. El año pasado, el gobierno modificó las leyes para restringir aún más la cobertura mediática de las elecciones, lo que dificulta la denuncia de fraude.

Durante un tiempo el año pasado, Putin pareció debilitado frente a la rebelión de su antiguo aliado Yevgeny Prigozhin, quien se encaminó con sus mercenarios del grupo Wagner hacia Moscú. Ambas partes llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto y, dos meses después, Prigozhin murió en un sospechoso accidente aéreo. Ahora el Estado ruso controla directamente a los mercenarios.

Desde entonces, Putin ha reafirmado su autoridad. Podría estar sacando ventaja en la guerra. Rusia dispone de una mayor potencia de fuego y está sobreviviendo en gran medida a los intentos de



Exiliados rusos rinden homenaje al líder opositor Alexei Navalny en Barcelona, España, el día de su funeral, 19 de marzo de 2024.

aislamiento financiero gracias a regímenes represivos como China, India y Turquía, que compensan la disminución en la demanda de combustibles fósiles. La economía del país se ha convertido en una economía de guerra, con un fuerte enfoque del gasto estatal en el esfuerzo militar, aunque esta situación no es sostenible a largo plazo. Además, algunos de los gobiernos más autoritarios del mundo, como Irán y Corea del Norte, están suministrando armas.

Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas **carecen de municiones**. El apoyo a Ucrania ha sido puesto a prueba por los cambios políticos en Europa y la ruptura del consenso político en los Estados Unidos, donde los republicanos afiliados a Trump intentan bloquear toda nueva ayuda militar.

Puede que Putin esté en una posición favorable, pero el alto nivel de control estatal hace difícil sopesar cabalmente su popularidad, y las elecciones no ofrecerán ninguna evidencia en ese sentido. Dada la represión, es posible que la cantidad de protestas tampoco revele mucha información, pero aun así algunas han tenido lugar, incluidas las que fueron convocadas en respuesta a la muerte de Navalny.

Se ha gestado un movimiento de protesta vital en torno al descontento provocado por las pérdidas sufridas durante la guerra. En septiembre, una **encuesta independiente** reveló que el respaldo a la guerra había alcanzado su punto más bajo. Se informa que el ánimo de las tropas rusas es bajo, y los desertores **han instado** a otros a unirse a ellos. **Familiares** de soldados han **protestado** para exigir el cese de los combates.

Los manifestantes han protagonizado otros episodios de oposición. En noviembre, tuvo lugar una **manifestación** en Siberia en contra de una iniciativa local que buscaba restringir aún más las protestas. En enero de 2024, en Baymak, al sur de Rusia, cientos de personas se manifestaron en contra del encarcelamiento de un activista.

Estos momentos no necesariamente dan forma a un movimiento, pero pueden servir de inspiración para constituir uno, algo que a menudo sucede de manera inesperada. La historia de Putin está lejos de haber concluido pero, como ocurrió con otros tiranos en el pasado, probablemente parecerá invencible hasta justo antes de su caída.

 LEER MÁS:

➤ [RUSIA Y UCRANIA: HISTORIA DE DOS SOCIEDADES CIVILES](#)

El conflicto olvidado de Sudán

Con la atención global centrada en Gaza y Ucrania, apenas se destacan otros acontecimientos en los titulares. La guerra civil entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las milicias de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que comenzó en abril de 2023, ha desaparecido casi por completo del radar global. Sin embargo, ha provocado una crisis humanitaria de gran magnitud, no sólo en Sudán, sino también en los países vecinos, a los que se ha desplazado mucha gente, y en Chad en particular. Aunque la sociedad civil sudanesa ofrece soluciones, la comunidad internacional parece no prestar atención.

La guerra es un conflicto por la supremacía entre dos líderes rivales que anteriormente habían trabajado juntos en el gobierno militar: Abdel Fattah al-Burhan lidera las FAS y Mohamad Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti, comanda las FAR, surgidas de las infames milicias yanyauid.

Inicialmente, el conflicto se desarrolló en las calles de la capital, Jartum, y su ciudad vecina, Omdurman, pero desde entonces se ha extendido a otras partes de Sudán. Darfur está en llamas, y se acusa a las FAR de llevar a cabo **ejecuciones sumarias** de personas masalit y de otros grupos étnicos, replicando el genocidio indígena perpetrado por los yanyauid a principios de la década del 2000. En diciembre, las FAS **tomaron el control** de la gran ciudad de Wad Madani. También han estallado combates en la montañosa región de Kordofán. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan en Jartum y Omdurman, donde las tropas de las FAS lograron una excepcional victoria en febrero de 2024.

La sociedad civil sudanesa es diversa. Existe un sector con un historial de participación en procesos políticos que respaldó a la administración supuestamente de transición surgida tras el **golpe de 2021**. También hay OSC establecidas que defienden los derechos y prestan servicios esenciales. Y luego están los comités de resistencia: grupos de barrio que se formaron para desempeñar un papel crucial en la revolución de 2019, la cual derrocó al exdictador Omar al-Bashir, y que han seguido desafiando al gobierno militar.

Los comités se rigen por la democracia interna, toman decisiones por consenso y abogan por un gobierno democrático. Rechazan los planes del mundo exterior, que intentaron establecer una forma de régimen militar para garantizar la estabilidad, lo cual inevitablemente conduciría a la opresión. Durante el conflicto, también se han convertido en proveedores esenciales de artículos de primera necesidad, como alimentos y agua, servicios de salud e información vital.

Varios comités de resistencia han colaborado en la **elaboración de un plan** de transición, pero fuerzas tanto internas como externas rechazan sistemáticamente sus demandas de un régimen civil democrático, que consideran demasiado ambiciosas. Hoy en día, el ejército está atacando a las personas involucradas en los comités de resistencia.

Los ataques contra la sociedad civil forman parte de una ola más amplia de violencia contra la población civil perpetrada por las FAS, las Fuerzas de Defensa Nacional y otras milicias. Según las Naciones Unidas, desde abril, **más de 12.000 personas** han sido asesinadas y **7,76 millones** han sido desplazadas, otorgando a Sudán el triste récord de tener el mayor número de desplazados en el mundo. El cólera y otras enfermedades como el dengue, la malaria y el sarampión se han propagado en medio del caos, sometiendo al sistema de salud a una presión sin precedentes. En las regiones más afectadas, la comida, el agua y los medicamentos esenciales son escasos.

Las fuerzas armadas están atacando tanto a los trabajadores humanitarios como a **los periodistas**, lo que les impide proporcionar ayuda vital. Además, a principios de diciembre, el gobierno liderado por las FAS **puso fin** al mandato de la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán, la cual tenía la responsabilidad de respaldar la transición hacia un régimen democrático.

Los Estados extranjeros están evaluando sus intereses para determinar qué bando apoyar, considerando la importancia estratégica de Sudán debido a su tamaño y su ubicación entre el África Oriental y el Norte de África. Según informes, los Emiratos Árabes Unidos están actualmente suministrando armas a las fuerzas de seguridad sudanesas. Además,

los mercenarios rusos parecen haber tomado partido, dado el interés de ambos países en las minas de oro de Sudán. Por otro lado, Egipto continúa brindando un apoyo constante a la institución militar, mientras que aparentemente Irán está suministrando armas a Burhan, y las fuerzas especiales ucranianas están **involucradas** junto a las FAS.

Mientras tanto, los Estados están lejos de proporcionar la ayuda necesaria: a finales de año, las Naciones Unidas informaron que solo habían recibido el **39%** de los fondos solicitados.

Los Estados extranjeros han pecado sistemáticamente de ilusos, suponiendo que la única forma de garantizar la estabilidad es colaborar con los líderes militares. Todos los procesos emprendidos desde el golpe de Estado de 2021 han fortalecido el poder de los jefes militares actualmente en conflicto, demostrando así la insensatez de este enfoque.

El conflicto actual representa el mejor argumento posible a favor de la democratización en lugar de la continuación del régimen militar. El poder no debería pertenecer a ninguno de los generales en conflicto, sino a todo el pueblo sudanés. La comunidad internacional debe otorgar una importancia seria a la sociedad civil de base, especialmente a los comités de resistencia.

 LEER MÁS:

➤ [EL CONFLICTO DE SUDÁN NECESITA SOLUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL](#) 

Sahel: el gobierno militar no logra cambiar las cosas

En otros lugares del Sahel, en los últimos años, los ejércitos han tomado el control de varios Estados. En 2023, Níger se sumó a sus vecinos Burkina Faso, Chad y Mali, en la lista de regímenes militares **► VÉASE CAPÍTULO**. El ejército utilizó la misma justificación que en



Un grupo de manifestantes ondea una bandera en una manifestación por el Día de la Independencia en Niamey, Níger, el 3 de agosto de 2023.

otros casos, citando la incapacidad del gobierno civil para dominar a la insurgencia yihadista que se extiende más allá de las fronteras.

Los Estados de la región bajo régimen militar generalmente se han alejado de sus antiguas relaciones con Occidente, especialmente con la antigua potencia colonial, Francia, así como con los órganos de las Naciones Unidas. Han optado por una cooperación más estrecha con Rusia, que a menudo implica la llegada de mercenarios rusos que extraen recursos como el oro, y que a cambio lideran la lucha contra la insurgencia. La mayoría de los mercenarios provienen del antiguo grupo Wagner, **rebautizado** como Africa Corps tras ser absorbido por Putin.

Los mercenarios rusos están involucrados en al menos **18 países africanos**. En Mali, participan activamente en combates e incluso han **causado la muerte de civiles**. El aumento de la intervención rusa es a menudo precedido por intensas campañas de desinformación prorrusa y antifrancesa, como parece haber ocurrido en **Níger**.

Los golpes militares y la inclinación hacia Rusia generalmente reciben un importante respaldo de la opinión pública, motivada por los fracasos pasados en la lucha contra la crisis de seguridad. Quienes más padecen la inseguridad tienden a estar más dispuestos a aceptar cualquier cambio que prometa mejorar la situación. Esta tendencia también se observa en **El Salvador**, cuyo presidente goza de gran popularidad gracias a políticas de seguridad draconianas que han contenido la violencia de las pandillas, permitiéndole acumular y concentrar el poder ► **VÉASE CAPÍTULO**.

Hasta el momento, la junta de Níger ha seguido el mismo patrón. Cuando el gobierno de Mali expulsó a las fuerzas francesas, Níger se convirtió en la base de las operaciones militares regionales de Francia. Los movimientos sociales de Níger **protestaron** exigiendo la retirada francesa y la gente ondeó banderas rusas al celebrar el golpe de Estado. La junta **rompió** los acuerdos de cooperación militar con Francia y suspendió las emisoras francesas. En octubre, **ordenó** la salida del funcionario de más alto rango de la ONU en Níger. En diciembre, puso fin a dos acuerdos militares con la Unión Europea (UE) y **se reunió** con oficiales militares rusos. El jefe de la junta de Chad también **se reunió** con Putin en enero de 2024, señalando un posible cambio con respecto a su anterior alineamiento con Occidente.

Sin embargo, no hay pruebas de que el gobierno militar o la importación de mercenarios rusos mejoren la situación de seguridad. No lo han hecho en los países que sufrieron golpes militares en años anteriores. La insurgencia continúa y la violencia ha **aumentado**, mientras que la situación humanitaria no ha hecho más que **empeorar**.

Existe otro problema para la sociedad civil. Aunque inicialmente algunos grupos de la sociedad civil acogen con satisfacción los golpes de Estado como respuesta a la inseguridad, las juntas reprimen

invariablemente las libertades cívicas. En Níger, el nuevo gobierno ha restringido las protestas y los **medios de comunicación**, siguiendo los pasos de **Burkina Faso, Chad y Mali**. En última instancia, estas restricciones dificultarán que la sociedad civil reclame cambios cuando vuelva a surgir el descontento.



LEER MÁS:

➤ **GOLPE DE ESTADO EN NÍGER: MALAS NOTICIAS PARA LA DEMOCRACIA EN ÁFRICA OCCIDENTAL** EN

Myanmar: golpe de Estado devenido conflicto

Han pasado tres años desde el golpe de Estado en Myanmar, y el conflicto se ha arraigado. Dada la historia de décadas de ejercicio del poder por parte de los militares, es posible que los generales esperaran encontrar poca resistencia al derrocar al gobierno electo en febrero de 2021. Sin embargo, el derrocado Gobierno de Unidad Nacional ha respondido con una campaña militar, a menudo apoyada por milicias étnicas largamente establecidas. Grandes porciones del país no están bajo control militar.

La sociedad civil está haciendo todo lo posible para responder a las necesidades humanitarias, defender los derechos humanos y buscar una vía hacia la paz. Los grupos de la sociedad civil de Myanmar y de la región han elaborado un **plan** que insta a una respuesta internacional para poner fin a la violencia militar, incluyendo sanciones, un embargo de armas y una remisión a la CPI.

La sociedad civil también insta a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el organismo regional clave, a priorizar el conflicto y entablar un diálogo con los numerosos grupos que buscan el retorno a la democracia. Hasta el momento, esto no ha ocurrido, ya que la ASEAN se aferra a un **plan** desacreditado desde hace mucho tiempo

y los gobiernos de la región muestran signos de querer normalizar las relaciones con la junta. Se puede esperar poco progreso mientras el gobierno autoritario de Laos presida la organización en 2024.



Laos ha designado a un diplomático experimentado como enviado especial de la ASEAN, encargado de reunirse con el líder de la junta, Min Aung Hlaing, en Myanmar. Sin embargo, la falta de un programa claro para involucrar a los partidarios de la democracia, como el Gobierno de Unidad Nacional, el Consejo Consultivo de Unidad Nacional y las Organizaciones Étnicas Revolucionarias, suscita dudas sobre el papel progresista de la ASEAN. Dadas las relaciones históricas y políticas entre la junta militar y el gobierno de Laos, persisten preocupaciones sobre la alineación de la ASEAN con los intereses del pueblo de Myanmar.



AILEEN DIAZ BACALSO
FORUM-ASIA

Sin embargo, continuar por el mismo camino solo puede resultar en más derramamiento de sangre. La violencia se intensificó durante 2023. En noviembre, tres grupos armados del norte se unieron a la lucha contra la junta, formando la Alianza de la Hermandad. En lo que las Naciones Unidas calificaron como la **mayor escalada** de combates desde el golpe de Estado, la ofensiva de los rebeldes **cortó** rutas comerciales vitales con China. Parece seguro que en el corto plazo la junta no puede ganar este conflicto.

Acorralados, los militares reaccionaron con una violencia repugnante. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar informa que la junta ha bombardeado hospitales, escuelas, aldeas y campamentos de desplazados. Ha masacrado y torturado civiles y utilizado violencia sexual y trabajos forzados y bloqueado ayuda humanitaria vital.

La junta intenta controlar la información, como lo demuestra la detención de **64 periodistas**. Sin embargo, la verdad no puede ser ocultada. En septiembre, el mecanismo de investigación independiente

de las Naciones Unidas para Myanmar **informó** sobre la intensificación de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Se informó que la mayoría de los altos mandos militares son **responsables** de crímenes de guerra. En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, **condenó** la violencia, calificándola de “inhumanidad en su forma más vil”.

El ataque aéreo **más mortífero** hasta la fecha ocurrió en abril de 2023, cuando se estima que 168 personas, incluidos 40 niños, fueron asesinadas por las fuerzas militares en el pueblo de Pa Zi Gyi. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que realiza un seguimiento regular, **informa** que hasta ahora 4.598 personas han sido asesinadas por la junta y los grupos afines a los militares, y que 26.199 personas están actualmente detenidas. Las cárceles son peligrosas: 34 presos políticos **murieron en custodia** en 2023.

Muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Hacia finales de 2023, **más de 2,6 millones de personas** habían sido desplazadas, 1,1 millones más que el año anterior. Las Naciones Unidas estiman que, mientras 18,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, solo se ha recibido el **29%** de los fondos solicitados en 2023. Mientras tanto, los trabajadores humanitarios no están a salvo: al menos 142 de ellos fueron arrestados o detenidos por la junta en 2023.

En julio, el ejército volvió a **prorrogar** el estado de emergencia, que ha estado en vigor desde el golpe de Estado. En febrero de 2024, **anunciaron** la implementación del servicio militar obligatorio para los jóvenes. Los generales ya no pueden pretender avanzar hacia las elecciones que se habían comprometido a celebrar y que esperaban usar para legitimar su poder.

Mientras la ASEAN se debilita, el ejército sufre cierta presión internacional. En octubre, el gobierno estadounidense **impuso sanciones** a la Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), la empresa estatal que constituye la principal fuente de ingresos extranjeros del régimen. La Unión Europea también intensificó **sus sanciones** en diciembre, especialmente contra dos empresas que suministran armas y generan ingresos para la junta. En mayo, el grupo indio Adani cedió a las presiones y **vendió** su puerto en Myanmar.

La comunidad internacional debe mantener aislada a la junta y negarle cualquier reconocimiento diplomático. Los estados deben sancionar la red de empresas del ejército, incluida MOGE. Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de abril de 2023 condenó la violencia de la junta, pero **no** pidió sanciones como la prohibición de la venta de combustible de aviación o un embargo de armas. La sociedad civil exige la implementación de estas medidas esenciales para poner fin a las masacres.



LEER MÁS:

➤ CATÁSTROFE MILITAR EN MYANMAR: TRES AÑOS Y CONTANDO **EN**

Nagorno-Karabaj: fin de un conflicto congelado

El prolongado y a menudo estancado conflicto entre Armenia y Azerbaiyán llegó a su fin de manera decisiva en septiembre, dejando a la sociedad civil luchando por ayudar a las multitudes que se vieron obligadas a huir repentinamente.

Ambas partes estuvieron enfrentadas durante mucho tiempo por la disputada región de Nagorno-Karabaj, situada dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Azerbaiyán, pero que hasta hace poco estaba habitada mayoritariamente por armenios étnicos, como la autoproclamada República secesionista de Artsaj. La disputa resurgió cuando ambos países se independizaron al final de la Guerra Fría.

Históricamente, Armenia tenía el control de la situación, pero Azerbaiyán recuperó gran parte del territorio en una ofensiva en 2020, en la que perdieron la vida miles de personas. La región separatista restante dependía de un estrecho corredor que la conectaba con Armenia, pero Azerbaiyán impuso un bloqueo en diciembre de 2022.



Refugiados de Nagorno-Karabaj saludan desde la parte trasera de un camión tras cruzar la frontera con Armenia el 28 de septiembre de 2023.



La libre circulación de personas hacia Armenia se volvió imposible. El prolongado bloqueo provocó una crisis humanitaria debido a la escasez de bienes esenciales, como electricidad, combustible y agua, así como al cierre de servicios básicos.



SHUSHANIK NERSESYAN
People in Need Armenia

La consecuencia fue una crisis humanitaria que paralizó el día a día. Diez meses de bloqueo agotaron a la población, por lo que el siguiente ataque azerbaiyano, en septiembre, fue breve. Ambas partes acordaron un alto el fuego justo un día después de que comenzara la ofensiva. Poco más de una semana después, la República de Artsaj anunció su disolución.

En 2020, Azerbaiyán rompió su promesa de respetar el estatus especial de Nagorno-Karabaj. Estaba claro que el gobierno simplemente pretendía absorber la región dentro de Azerbaiyán. Dado el historial de violencia étnica y el tamaño mucho mayor de la población azerbaiyana, los armenios temían lo peor.

Cuando las autoridades azerbaiyanas levantaron el bloqueo, se produjo un éxodo. Más de 100,000 personas, casi toda la población de etnia armenia, huyeron a Armenia. En lo que podría calificarse razonablemente como un episodio de migración forzosa y limpieza étnica, el territorio se vació.



El bloqueo y la ofensiva tuvieron el objetivo de llevar a cabo la limpieza étnica de la población armenia en Nagorno-Karabaj. La privación intencionada de recursos esenciales para la supervivencia, seguida del ataque directo para apoderarse de Nagorno-Karabaj, junto con la creación de condiciones para que la población armenia se marchara, indican que Azerbaiyán no contemplaba un final pacífico del conflicto ni garantías de derechos humanos que permitieran a la población armenia sentirse segura en sus hogares y continuar viviendo en Nagorno-Karabaj.



LIDA MINASYAN

Fondo de Colaboración para Europa Central y Oriental, el Cáucaso y Asia Central y Septentrional


El conflicto y sus secuelas transcurrieron sin mucho intento de intervención internacional. Azerbaiyán utiliza su riqueza petrolífera para establecer relaciones estratégicas con Estados europeos y proyectar una imagen internacional positiva, entre otras cosas, al acoger la próxima cumbre sobre el clima, la COP29 ► **VÉASE CAPÍTULO**. Rusia, preocupada por su guerra en Ucrania, ya no es el sólido socio que fue en el pasado para Armenia. Turquía, el aliado más firme de Azerbaiyán,

está ocupando el espacio regional que dejó vacante Rusia. Como consecuencia, es poco probable que los responsables de violaciones de los derechos humanos tengan que rendir cuentas.

Azerbaiyán es un Estado autoritario en el que dos generaciones de la misma familia han ocupado el poder desde 1993. Su espacio cívico está cerrado, lo que impide la crítica a las acciones del Estado. El gobierno adoptó nuevas medidas represivas tras su victoria, antes de unas elecciones presidenciales anticipadas celebradas en febrero de 2024 que no fueron ni remotamente libres ni justas y que otorgaron al presidente en funciones un quinto mandato consecutivo. Según informes, en el mes siguiente a la victoria de Azerbaiyán, las autoridades detuvieron a más de **20 personas** por criticar la ofensiva. Desde entonces, el Estado ha continuado deteniendo a periodistas y disidentes.

Aunque el conflicto haya terminado, es necesario abordar los problemas a largo plazo. Armenia tiene una nueva población resignada a no volver nunca a sus antiguas casas. La gente tiene necesidades duraderas, tanto materiales como psicológicas. La sociedad civil, que ha trabajado para proporcionar ayuda de emergencia durante el éxodo, debe ahora estar capacitada para desempeñar un papel pleno en la configuración de una respuesta más amplia, que debe incluir la rendición de cuentas por las violaciones de derechos cometidas durante el conflicto.

 LEER MÁS:

➤ [NAGORNO-KARABAJ: CONSECUENCIAS DE LARGO ALCANCE DE UN CONFLICTO OLVIDADO](#) 

Etiopía: preguntas sin respuesta

Etiopía es escenario de otro conflicto que el Estado quiere desesperadamente dar por terminado. Una guerra de dos años entre las fuerzas federales y los insurgentes de la región de Tigray supuestamente concluyó en noviembre de 2022 tras la firma de un acuerdo de paz que confirmó la victoria del gobierno federal. Sin embargo, la violencia persiste en varias partes del país, especialmente en la región de Amhara, donde también crece una **crisis alimentaria**. El Estado continúa reprimiendo a la sociedad civil, a los manifestantes de la oposición y a **los medios de comunicación independientes**, utilizando cortes de internet para limitar el flujo de información.

La Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Etiopía **documentó** que las fuerzas eritreas, que lucharon del lado del gobierno federal, y las milicias amharas han continuado cometiendo violaciones y actos de violencia sexual desde que entró en vigor el acuerdo de paz de Tigray. Amnistía Internacional ha **encontrado indicios** de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad desde la firma del acuerdo de paz. La Comisión Etíope de Derechos Humanos ha **detectado** indicios de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de las fuerzas gubernamentales en Amhara. Según **informes**, en enero de 2024, las tropas federales llevaron a cabo ejecuciones sumarias matando a civiles en la ciudad amhara de Merawi.

El Estado no muestra ningún interés real en poner fin a las violaciones de derechos ni en exigir responsabilidades a los autores, especialmente a los que están de su lado. El informe de la Comisión de la ONU concluye que el proceso de justicia transicional del gobierno no cumple con las normas internacionales. Asegura que el gobierno no investiga las violaciones de derechos humanos y no proporciona apoyo a las sobrevivientes de violencia sexual y de género. Las víctimas **no confían** en que el Estado las tome en serio.

El gobierno busca presentar el conflicto como resuelto y pasar página ante la comunidad internacional. Presionó con éxito para cerrar la Comisión de Investigación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, cuyo mandato **finalizó** en junio, tras dos años de nunca haber elaborado un informe. Luego permitió discretamente que el mandato de la Comisión de la ONU expirara a finales de año. Para renovarlo, se necesitaba una votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero tras las presiones de Etiopía, nunca se llevó a cabo.

Los **llamados** de la sociedad civil para que continuaran estas investigaciones internacionales no fueron escuchados porque los Estados prefirieron dejar el conflicto atrás para preservar sus relaciones con un país estratégico en la región. Mientras los conflictos arden en otras partes, este ha desaparecido discretamente de los titulares.

Quizás envalentonado por la falta de rendición de cuentas sobre sus guerras en Tigray y Amhara, en enero de 2024 el gobierno etíope anunció un acuerdo con Somalilandia que amenaza con avivar aún más las tensiones regionales. Etiopía, sin salida al mar desde la independencia de Eritrea en 1993, **anunció** un acuerdo para arrendar un tramo de costa a Somalilandia, una nación de facto dentro de las fronteras de Somalia sin reconocimiento internacional. Se ha sugerido que Etiopía podría reconocer a Somalilandia a cambio, lo que provocaría la airada respuesta de Somalia.



La implicación internacional debe tener como objetivo ayudar a Etiopía y Somalia a alcanzar una solución mutuamente aceptable. Esto requiere una diplomacia cuidadosa para evitar exacerbar las tensiones existentes o generar nuevos problemas. También es esencial instar a aquellos con intereses creados en la región a que eviten explotar esta situación para sus agendas. La desescalada debe ser el objetivo primordial.



MENGISTU ASSEFA

Centro para el Avance de los Derechos y la Democracia

Todas las partes deben tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que la disputa actual no desencadene otro conflicto armado. Al mismo tiempo, el gobierno etíope debe atender los llamados de la sociedad civil para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes contra los derechos humanos y permitir que la población se movilice, haga campañas y exprese su desacuerdo.



LEER MÁS:

➤ ETIOPÍA: SIN PAZ NO HAY JUSTICIA **EN**

Haití: la violencia de las pandillas fuera de control

En Haití, la violencia tiene un origen distinto, pero sus efectos en la vida de las personas son igualmente mortíferos. La violencia de las pandillas se apodera del país. La sociedad civil, una fuente de ideas a menudo ignorada por el gobierno y la comunidad internacional, critica las propuestas de intervención internacional y pide en su lugar un gobierno de transición de amplia base que ayude a conducir a Haití hacia la seguridad.

La violencia de las pandillas ha aumentado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Ahora se conoce que un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos, perpetró el asesinato, aunque aún no está claro quién ordenó el golpe. Ariel Henry, el sustituto en funciones de Moïse, figura entre los acusados de complicidad. Sin embargo, no está incluido entre las 50 personas recientemente **acusadas** por el asesinato, que incluyen a la viuda de Moïse, Martine Moïse, y al ex primer ministro Claude Joseph. Estos últimos argumentan que se trata de una maniobra políticamente motivada por Henry. Mientras tanto, Henry ostenta poder político formal, pero carece de mandato, ya que los mandatos de todos los cargos electos del gobierno han expirado.

Las pandillas criminales han prosperado en el vacío de poder, llegando a controlar aproximadamente la mitad de Haití. La capital, Puerto Príncipe, se ha convertido en el epicentro de una sangrienta batalla entre pandillas rivales. Según **cálculos** de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, durante 2023 perdieron la vida alrededor de 3.960 personas, 1.432 resultaron heridas y 2.951 fueron secuestradas. Sin embargo, estas cifras podrían ser mayores, ya que muchos delitos no se denuncian.

Las pandillas no solo se limitan a la violencia entre ellas; también atacan a activistas por la paz y **periodistas**. Utilizan la violencia sexual de manera sistemática para controlar a las comunidades mediante el miedo. Además, demuestran habilidades en la extracción de recursos, incluido el secuestro extorsivo.

Las redes de corrupción establecen conexiones entre las pandillas, jueces y policías, generando una impunidad generalizada. El sistema de justicia penal se muestra débil, y la policía carece del **equipamiento adecuado**. Como resultado, no se han registrado acusaciones **recientes** ni condenas relacionadas con la violencia de las pandillas. En 1995, Haití disolvió su ejército tras múltiples intentos de golpe de Estado.

Aquellos con capacidad para huir están optando por hacerlo, enfrentándose a hostilidades y peligros. La República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, no les da la bienvenida; incluso está construyendo un muro fronterizo. Estos individuos se ven obligados a tomar rutas riesgosas hacia países más distantes, y aun llegando a su destino, **no encuentran seguridad**. Tan solo en el primer semestre de 2023, **más de 115.000** personas fueron repatriadas a Haití en contra de su voluntad.

En respuesta a la violencia, algunos han formado **grupos de vigilantes** que llevan a cabo linchamientos de presuntos miembros de pandillas, cobrándose también víctimas sin conexión con estas.

La violencia ha generado una grave crisis humanitaria. La gente lucha por acceder a lo esencial, como alimentos y agua. El cólera ha retornado y muchos niños están desnutridos. La inseguridad limita el acceso



Una familia huye de la violencia de las pandillas en el barrio de Pétió-Ville de Puerto Príncipe, Haití el 30 de enero de 2024.

Foto de Richard Pierrin/AP via Getty Images.

humanitario, y, al igual que en Myanmar y Sudán, el financiamiento escasea. En julio, el Programa Mundial de Alimentos se vio obligado a **reducir** la ayuda alimentaria a un número menor de personas.

En este contexto desgarrador, la necesidad de ayuda internacional es evidente, pero a la sociedad civil le preocupa la naturaleza y el propósito de dicha asistencia. La historia de Haití desde su independencia ha estado marcada por interferencias extranjeras, especialmente por parte del gobierno estadounidense. Incluso las fuerzas de la ONU, lejos de ser salvadoras, fueron responsables de abusos sexuales y de un **brote de cólera** durante su misión de mantenimiento de la paz de 2004 a 2017. Los grupos internacionales de la sociedad civil, tales como lo que respondieron al devastador terremoto de 2010, han sido criticados por un enfoque autoritario y acusados de abusos sexuales.

El plan más reciente, delineado en una **resolución del Consejo de Seguridad de la ONU** adoptada en octubre, proponía enviar una fuerza policial internacional para fortalecer la capacidad de aplicación de la ley. Aunque durante bastante tiempo fue el que impulsó la idea, el gobierno estadounidense, posiblemente consciente de su historial negativo en Haití, buscó que otro país la liderara.

El gobierno de Kenia **se ofreció** a desplegar un total de mil policías, y varios países caribeños prometieron un contingente menor. Sin embargo, en enero de 2024, un tribunal keniano **declaró** inconstitucional el plan en respuesta a una demanda de la oposición.

Ante el fracaso de esta última propuesta, los grupos de la sociedad civil haitiana buscan conocer cuál es el plan a largo plazo. Se preguntan cuánto tiempo planean quedarse en el poder los políticos no elegidos que lideran el desastre, y **demandan** un gobierno de transición no partidista como primer paso para salir de la crisis. No desean una respuesta internacional que fortalezca aún más a una élite corrupta.

La sociedad civil de Haití representa una **fuerza crucial de resiliencia**, pero su papel ha sido descuidado durante mucho tiempo por el gobierno nacional, los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales y la sociedad civil internacional. Ahora es el momento

de darles un rol protagónico. La sociedad civil haitiana debería, como mínimo, estar habilitada para demandar rendición de cuentas ante toda nueva iniciativa de seguridad que pueda surgir tras el desbaratamiento del plan keniano. Deben escucharse sus demandas de una respuesta más reflexiva que vaya más allá de este enfoque improvisado.



➤ **HAITÍ: LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DEBE TRABAJAR CON LA SOCIEDAD CIVIL** EN

UN MUNDO DE DESPLAZAMIENTOS

Los conflictos representan una de las principales causas de migración y desplazamiento, junto con la opresión política, las tensiones económicas y, cada vez más, el cambio climático. A pesar de la multiplicidad de conflictos y crisis en un mundo cada vez más interconectado, los Estados se resisten a reconocer la realidad del desplazamiento humano, tanto dentro de las fronteras nacionales como más allá de estas. Las condiciones para los inmigrantes y refugiados se tornan cada vez más adversas.

Europa: hostilidad en aumento

En Europa, se observa un evidente doble rasero. En general, los países europeos han continuado acogiendo a los numerosos desplazados a causa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Hasta diciembre de 2023, se contabilizaban **6,3 millones** de refugiados ucranianos, de los cuales 5,9 millones vivían en Europa, además de **3,7 millones** de desplazados internos dentro de Ucrania.

No obstante, incluso en este contexto, los Estados comienzan a mostrar signos de fatiga compasiva a medida que la guerra se prolonga. En Irlanda, la escasez de viviendas ha alimentado una reacción violenta, evidenciada a través de **disturbios** antiinmigrantes y antimusulmanes en Dublín en noviembre de 2023. Al mes siguiente, el gobierno **anunció** recortes en las ayudas para los recién llegados de Ucrania. En toda la Unión Europea, con el estatuto temporal otorgado a punto de expirar en 2025, los ucranianos expresan preocupación por la duración de su estancia.

Sin embargo, la situación es mucho peor para los demás desplazados. Los gobiernos europeos han exhibido evidentes rasgos racistas al acoger mayoritariamente a los ucranianos mientras intensifican la persecución de las personas de color del sur global.

En Europa, está surgiendo una preocupante tendencia de los gobiernos a externalizar sus políticas migratorias: los Estados pagan a los países más pobres para que acojan a los inmigrantes que no desean recibir. Australia fue la precursora de este enfoque en 2001, enviando a personas a centros de detención en Nauru y Papúa Nueva Guinea, aunque fue considerado un caso atípico. Ahora, el gobierno británico avanza con su **plan Ruanda**, que busca deportar a Ruanda a aquellas personas que ingresen ilegalmente al Reino Unido y obligarlas a permanecer allí, incluso si sus solicitudes de asilo son exitosas.

Cuando el gobierno **presentó** el plan, no estaba claro si realmente esperaba que tuviera éxito o si el propósito era poner a la oposición en aprietos en un tema político polémico, mientras el partido gobernante tambaleaba en las encuestas. Aunque el Reino Unido recibe muchos menos solicitantes de asilo que otros grandes países europeos, los políticos de derecha y los medios de comunicación que los respaldan han enfocado gran parte de su atención en el tema de las “pateras”: la llegada de inmigrantes a la costa sur del Reino Unido después de cruzar desde Francia. Dado que el gobierno ha cerrado todas las rutas más seguras para los inmigrantes indocumentados, las personas están optando por la peligrosa travesía a través de la ruta marítima más transitada del mundo en embarcaciones inadecuadas vendidas por pandillas de traficantes sin escrúpulos.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha convertido el plan Ruanda en una política central, pero la sociedad civil ha recurrido a los tribunales para intentar detenerlo. En noviembre, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan Ruanda, argumentando que Ruanda no es un país seguro para enviar solicitantes de asilo. Ruanda es un Estado autoritario con un **espacio cívico represivo**, donde los críticos del presidente Paul Kagame son asesinados o encarcelados de forma rutinaria, los derechos del colectivo LGBTQI+ no son respetados y los inmigrantes sufren discriminación.

El gobierno británico toma una postura contradictoria, sosteniendo tanto que Ruanda es un país acogedor como que la perspectiva de ser enviado allí disuadirá a la gente de cruzar. Su respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo ha sido reescribir la ley. Recientemente, ha reemplazado su memorando de entendimiento con Ruanda por un tratado y respaldó este acuerdo con un proyecto de ley, actualmente en el parlamento, que simplemente pasa por alto la sentencia del tribunal que declaró a Ruanda como país seguro. Además, el proyecto de ley limita aún más la capacidad de las personas para emprender acciones legales contra las decisiones de reubicación.

El gobierno también ha **anunciado** que impulsará un cambio de normas para obligar al personal de la administración a ignorar toda sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que impida las deportaciones planificadas, y algunos de sus políticos más extremistas promueven la idea de que el Reino Unido debe retirarse del Tribunal Europeo.



El costo humano de este proyecto de ley será catastrófico. Incluso antes de su aprobación, hemos observado cómo la perspectiva de ser enviados a Ruanda sumía a las personas a las que apoyamos en una ansiedad y angustia mental extremas, y seguimos registrando índices alarmantes de autolesiones y suicidios. Al implementarlo, el gobierno estará obligando a la gente a enfrentarse a un daño seguro e irreversible.



ARIA DANAPARAMITA

Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes, Reino Unido



Foto de Henry Nicholls/AFP vía Getty Images.

Protesta contra el más reciente plan de deportación a Ruanda del gobierno británico frente al Ministerio del Interior en Londres, Reino Unido, el 18 de diciembre de 2023.

Si el plan británico entra en vigor, es probable que suscite imitaciones, y ya hay indicios claros de ello. Dinamarca firmó un memorando similar con Ruanda en 2021, aunque aún no lo ha puesto en práctica. El **gobierno de extrema derecha** de Italia **anunció** en noviembre un acuerdo con Albania para reubicar migrantes rescatados del Mar Mediterráneo, una ruta migratoria clave. A cambio de financiación, Italia prometió respaldar la pretensión de Albania de ingresar a la Unión Europea. Aunque el Tribunal Constitucional de Albania **bloqueó temporalmente** el acuerdo al mes siguiente, acabó dándole **luz verde** en enero de 2024.

En noviembre, Alemania **anunció** medidas más estrictas para los solicitantes de asilo, que incluyen recortes en las prestaciones sociales. Grecia, por su parte, se ha vuelto más hostil para con migrantes y refugiados, como también con la sociedad civil que trabaja para ayudarlos. Ha enjuiciado a trabajadores humanitarios bajo acusaciones graves, como espionaje, trata de personas, pertenencia a organizaciones delictivas, fraude y lavado de dinero. Se trata de delitos que pueden acarrear penas de hasta 25 años de cárcel. Muchos acusados han permanecido en prisión preventiva y a otros se les ha prohibido viajar. El Estado también ha sometido a vigilancia a los activistas. El gobierno ha criminalizado las operaciones de rescate de migrantes en el mar, obligando a varias organizaciones a suspender sus actividades. Grecia también ha sido **acusada** de realizar devoluciones ilegales e incluso se ha **jactado** de “bloquear” a personas en su frontera.

Estas restricciones a los derechos de la sociedad civil que trabaja para ayudar a migrantes y refugiados fueron una de las principales razones por las cuales la calificación del espacio cívico de Grecia fue **rebajada** de “estrecho” a “obstruido” por el CIVICUS Monitor en marzo de 2023.

El desafío para la sociedad civil es que estas acciones se traducen en ciertos niveles de apoyo público a los gobiernos, razón por la cual los partidos adoptan una retórica antiinmigración antes de las elecciones. En Grecia, el partido gobernante, históricamente una típica fuerza de centroderecha, se aseguró un segundo mandato en 2023 mediante la adopción de políticas antiinmigración, que solían ser territorio exclusivo de la extrema derecha. Este caso ilustra cómo los partidarios de ideas extremistas sobre los migrantes y refugiados desplazan el centro político.

Lo irónico, sin embargo, es que Grecia, al igual que Alemania y otros Estados europeos, sufre actualmente de escasez de mano de obra en sectores clave de su economía, como la agricultura y los servicios. En respuesta a ello, en diciembre el gobierno griego **otorgó** reconocimiento legal a miles de inmigrantes indocumentados.

Grecia no es el único país de la UE acusado de realizar expulsiones ilegales. En abril, Lituania **aprobó una ley** que legaliza las devoluciones forzadas en situaciones de emergencia. A nivel regional, la UE es

acusada de maltratar a migrantes y refugiados, contradiciendo sus elevados principios de derechos humanos. Su agencia fronteriza, Frontex, es acusada de complicidad con la violencia y otros abusos de derechos. Grupos de la sociedad civil sostienen que sus políticas son responsables, al menos en parte, de la muerte de **más de 3.000 personas** el año pasado.

La situación podría empeorar. En diciembre, los Estados miembros de la UE **acordaron** un Pacto sobre Migración que amenaza con crear centros de detención en las fronteras, acelerar las deportaciones y permitir a los Estados realizar devoluciones forzadas en situaciones de crisis. La UE también está ignorando la preocupación por los derechos humanos en países como Etiopía y Túnez a cambio del compromiso de reforzar sus fronteras y devolver migrantes. Con estas acciones, la UE socava la solidaridad humanitaria y deshumaniza a migrantes y refugiados.



El plan Ruanda constituye uno de los elementos más hostiles del Reino Unido hacia los inmigrantes, reflejando una tendencia global más amplia. En todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, los gobiernos destinan fondos para fortalecer sus fronteras ya de por sí altamente militarizadas.

En tiempos de crisis o inestabilidad económica, los gobiernos recurren a los grupos marginados y a los inmigrantes como chivos expiatorios para desviar la atención de sus propias deficiencias. Es su truco más antiguo.



JULIA TINSLEY-KENT
Red de Derechos Migrantes, Reino Unido

La idea de que los países más ricos pueden simplemente pagarles a los más pobres para que resuelvan sus problemas también refleja algo inquietante sobre cómo ven el mundo, dividido entre aquellos que tienen derechos y aquellos que no. Apesta a colonialismo. La retórica política también está impulsando la discriminación y demonización e las personas de color y de creencias no cristianas en los países del norte global.

La gente está pagando un precio letal por el cierre de rutas migratorias seguras y legales. **Más de 2.500** personas murieron cruzando el Mediterráneo en 2023. A medida que estas vías se cierran, las personas recurren a rutas aún más arriesgadas. Ahora, intentan navegar por el traicionero Océano Atlántico para llegar a las Islas Canarias españolas. El número de personas que realizaron el viaje atlántico desde África Occidental aumentó **más de 1.000%** en 2023. La organización Caminando Fronteras **informó** que 6.618 personas, incluidos 384 niños, murieron o desaparecieron, y presuntamente han fallecido, al intentar cruzar a España en 2023. Ello equivale a 18 personas al día.

América: la misma historia

En el continente americano se observa un patrón similar de hostilidad y crecientes riesgos para quienes intentan llegar a los Estados Unidos. En un año electoral, los políticos estadounidenses han convertido el control de las fronteras en un tema altamente político, compitiendo por mostrarse como los más severos en materia migratoria.

En octubre, el presidente Joe Biden **anunció planes** para fortalecer la frontera sur de los Estados Unidos y reanudar los vuelos de deportación a Venezuela, previamente suspendidos. Sin embargo, nadie ha podido caer más bajo que Donald Trump, un nieto de inmigrantes que en diciembre **afirmó en un evento** que “los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país”, recurriendo sin filtros a la retórica del supremacismo blanco. La política ha interferido a tal punto que los republicanos han pospuesto repetidamente su apoyo a Ucrania para incluir medidas relacionadas con el control de las fronteras estadounidenses en el acuerdo.

En una intensificación de la politización de la migración, gobernadores republicanos de estados sureños como Texas han comenzado a **transportar** a migrantes recién llegados en autobuses hacia ciudades lejanas gobernadas por demócratas, abandonándolos allí sin ningún

respaldo, tratándolos como peones en su ajedrez político. En ciudades como Nueva York, se ha organizado un **esfuerzo voluntario** de gran envergadura para brindarles asistencia.

Al igual que en Europa, cuando se cierran las rutas tradicionales la gente opta por vías más arriesgadas. Actualmente, los migrantes se desplazan hacia el norte desde países sudamericanos a través del **tapón del Darién**, un territorio peligroso que conecta Colombia y Panamá. En 2023, una cifra récord de **520.000 personas** eligieron esta ruta antes infrecuente. Aproximadamente la cuarta parte fueron niños y jóvenes. Además de las desafiantes barreras naturales que deben superar, son vulnerables a asesinatos, violencia, agresiones sexuales y robos. En diciembre, Médicos sin Fronteras encontró que los incidentes mensuales de violencia sexual se habían **multiplicado por siete**.

Asimismo, la gente se aventura cada vez más en el mar, lo cual, al igual que en Europa, implica grandes peligros. Ha surgido una nueva ruta de tráfico de personas a través del Mar Caribe por las **Bahamas** y, como en Europa, muchos han perdido la vida. En noviembre, al menos 30 personas murieron cuando una embarcación proveniente de Haití **naufragó** frente a las Bahamas.

Alineamientos cambiantes en el sur global

A pesar de la ansiedad politizada en torno a la migración en el norte global, es un hecho innegable que la mayoría de los movimientos migratorios y desplazamientos ocurren dentro del sur global. Numerosas personas son desplazadas dentro de sus propios países o cruzan fronteras hacia naciones vecinas en el sur global.

Un ejemplo de ello son los refugiados sudaneses, quienes han continuado cruzando la frontera con Chad, un país de bajos ingresos que ya albergaba a **casi un millón** de personas desplazadas antes del inicio del conflicto. Los centros de refugiados están desbordados, y la gente vive hacinada en condiciones insalubres.

Los campamentos carecen de acceso suficiente a agua potable, alimentos y servicios de saneamiento. La ausencia de electricidad dificulta la comunicación con sus familias en Sudán, y ha generado inseguridad, especialmente entre las mujeres, cuando se desplazan por los campamentos al anochecer. La carencia de refugios adecuados es motivo de especial preocupación. Estas condiciones hacen que la comunidad de refugiados sea sumamente vulnerable a enfermedades y aumentan el riesgo de violencia de género. Es imperativo abordar estas necesidades de manera integral, lo cual demanda la atención y el respaldo inmediatos de la comunidad internacional.



MONIM HAROON
Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes, Chad

En términos generales, hasta ahora Chad ha demostrado solidaridad con los recién llegados, aunque esta postura podría cambiar si el conflicto en Sudán persiste. También se acusa a Chad de ser un punto de tránsito para las armas que terminan en manos de las FAR, responsable de conducir a la mayoría de los refugiados hacia Chad en primer lugar.

En otras partes del sur global, se observan señales preocupantes: los gobiernos están abandonando prácticas humanitarias largamente establecidas, y algunos sectores de la opinión pública se inclinan por culpar a los inmigrantes de los problemas económicos y sociales. En Sudáfrica, por ejemplo, la xenofobia ha aumentado, y un grupo vigilante antiinmigrante **planea presentarse** a las elecciones de este año.

Se estima que Pakistán alberga a cuatro millones de refugiados afganos, muchos de los cuales han huido de sucesivas oleadas represivas de los talibanes. En octubre, el gobierno ordenó la salida de todos los refugiados indocumentados, afectando a unos **1,7 millones de personas**. Aunque la justificó con referencias al terrorismo, la medida pareció dirigida a contrarrestar la presión económica, ya que algunos pakistaníes acusan a los afganos de quitarles empleos.



Foto de Hasan Mrad/DeFodi Images via Getty Images.

Refugiados víctimas de la creciente violencia racista piden ayuda para evacuar frente a las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Túnez el 21 de marzo de 2023.

Tras este anuncio, el gobierno siguió deteniendo a muchos afganos indocumentados y dejándolos en la frontera. Mucha gente fue expulsada incluso habiendo nacido en Pakistán. Se informó que las autoridades paquistaníes **cometieron abusos** tales como la confiscación de propiedades de afganos y la destrucción de sus documentos de identidad, buscando crear una situación hostil para que la gente se sintiera obligada a marcharse. El gobierno paquistaní también **impuso** “tasas de salida” de unos USD 660 a los refugiados afganos que obtuvieran un lugar de reasentamiento en otro país, una medida por la que se le acusó de beneficiarse a expensas de la miseria ajena.

Para las mujeres, las niñas, las personas LGBTQI+, los periodistas y cualquier persona crítica de los talibanes que regrese, la represión es inevitable. La política de Pakistán no hace más que empeorar la ya desesperada situación humanitaria y de derechos humanos en Afganistán.

“ A pesar de nuestras reiteradas peticiones, no hemos recibido el suficiente apoyo internacional, el cual resulta crucial para evitar una mayor escalada de la crisis. Dadas las actuales condiciones invernales en Afganistán, nuestro objetivo inmediato es proporcionar refugio y kits de invierno. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que aborde estos problemas acuciantes e instamos al gobierno de Pakistán a detener, al menos temporariamente, las expulsiones de refugiados y a elaborar una estrategia en colaboración con las autoridades de Afganistán y la Agencia de la ONU para los Refugiados.



HABIB MALIK ORAKZAI

Organización Internacional de Derechos Humanos de Pakistán

Pakistán sigue los pasos de Turquía, que acoge a unos 3,6 millones de refugiados sirios. El partido gobernante ha avivado la xenofobia como respuesta a los problemas económicos y como parte de su estrategia de cara a las **elecciones presidenciales** de mayo. Como muestra de la normalización del sentimiento tóxico contra los inmigrantes, la oposición ha hecho campaña prometiendo ser aún más severa con los inmigrantes sirios.

En una flagrante violación del principio de no devolución de la Convención sobre los Refugiados, muchas personas están siendo forzadas a regresar a Siria, donde **corren el riesgo** de ser detenidas y encarceladas. El Estado sirio está perpetrando **grotescas violaciones de derechos humanos**, incluso contra quienes **regresan**. Antes de ser devueltas, las personas son detenidas y recluidas en condiciones terribles en centros de detención. Quienes permanecen en Turquía enfrentan mayores niveles de **hostilidad pública y violencia**.

En el Líbano, donde reside una gran población de refugiados sirios, éstos están siendo designados por las autoridades como chivos expiatorios en un contexto de crisis económica y política prolongada, y deportados a Siria. Mientras tanto, el sangriento gobernante sirio Bashar al-Assad ha sido readmitido en las altas esferas regionales. Los Estados que antes lo condenaban ahora **normalizan** sus relaciones, lo que podría abrir la puerta a más retornos forzosos.

En Túnez, el presidente autoritario Kais Saied ha dirigido ataques contra los africanos negros que viven en el país, tratando de enfocar la indignación pública no en la economía fallida ni en sus numerosos **ataques contra las libertades**, sino en una minoría visible. Ha culpado a los inmigrantes de crímenes y violencia, difundiendo teorías conspirativas según las cuales forman parte de un complot para socavar el país.

La amenaza no se quedó en palabras. En julio, el gobierno habría reunido a **centenares de personas**, incluidos niños y mujeres embarazadas, para **expulsarlas** a las fronteras de Túnez con Argelia y Libia. En la frontera argelina, estas personas quedaron atrapadas en el desierto, expuestas a temperaturas superiores a los 40 grados. En la frontera libia, se enfrentaron al peligro en una zona militarizada. Algunas perdieron la vida y otras fueron víctimas de violencia sexual. Ante la reacción de la comunidad internacional, las autoridades luego trasladaron a algunas personas a campos. Grupos locales también perpetraron ataques violentos.

Hubo un tiempo en que Saied habría enfrentado condena internacional por avivar el racismo, pero el interés prioritario de la UE en el control

migratorio le está permitiendo salir indemne. En julio, la UE y el gobierno tunecino **firieron** un acuerdo para proporcionar a Túnez alrededor de USD 1.100 millones que se destinarán, entre otras cosas, a la prevención de la inmigración y al retorno de migrantes tunecinos desde países de la UE, dado que la gente ha continuado huyendo de las dificultades económicas y la represión. Sin embargo, las relaciones entre la UE y el gobierno tunecino se han tensado desde entonces, y este último ha **devuelto** aproximadamente USD 65,4 millones ya recibidos. Dado que las maniobras políticas continúan, nada permite suponer que la vida de las personas negras en Túnez vaya a mejorar.



LEER MÁS:

- GRECIA: LA ACCIÓN HUMANITARIA BAJO ATAQUE EN
- ELECCIONES GRIEGAS: MALAS NOTICIAS PARA MIGRANTES Y REFUGIADOS EN
- SUDÁN: MILLONES DE PERSONAS OBLIGADAS A HUIR DEL CONFLICTO EN
- TÚNEZ: EL RACISMO SE SUMA A LA REPRESIÓN EN

HORA DE CAMBIAR

El año 2023 lamentablemente estuvo marcado por sufrimientos humanos inmensos e innecesarios. Personas inocentes, niños incluidos, fueron no solamente víctimas de violencia, sino también, en muchos casos, blanco deliberado de ataques. Los sobrevivientes enfrentaron una crueldad y hostilidad constantes. Fuerzas gubernamentales, milicias y otros grupos violentos llevaron a cabo ataques generalizados contra civiles e infraestructuras vitales. Junto con el aumento exponencial del gasto militar, esta situación presenta el riesgo de que los avances logrados hacia un mundo más pacífico desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial acaben perdiéndose.

Sin embargo, no tiene por qué ser así. La vida no debería ser tan desechable. La sociedad civil aboga por la senda de la paz, la desescalada, la justicia y la inclusión. Exige el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario largamente establecido y que no respetarlo tenga consecuencias. Reclama solidaridad con las víctimas de la violencia y colaboración entre grupos de la sociedad civil, incluidas organizaciones de mujeres y jóvenes, sindicatos y grupos religiosos, para poner fin a la violencia.

La sociedad civil es a menudo reprimida y convertida en blanco deliberado de violencia en situaciones de conflicto. Los procesos globales y nacionales encaminados a la resolución de los conflictos son a menudo diálogos elitistas que favorecen a los mismos actores y mentalidades que resultaron en el estallido de los conflictos y dejan de lado cuestiones cruciales de justicia y reparación. La sociedad civil defiende las voces de las personas más marginadas y excluidas, afectadas de manera desproporcionada por los conflictos.

Si los enfoques tradicionales para lidiar con el conflicto funcionaran, el mundo no estaría en este estado calamitoso. Es hora de escuchar a la sociedad civil, incluirla y habilitarla, y abrir el espacio cívico para que pueda desempeñar todos los roles que le corresponden.



Protesta contra la deportación de refugiados sirios ante las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Beirut, Líbano, el 19 de mayo de 2023.

Foto de Fadel Itan / NurPhoto via Getty Images.

CONÉCTESE CON NOSOTROS

 civicus.org

 info@civicus.org

 [/CIVICUS](https://www.facebook.com/CIVICUS)

 [@CIVICUSespanol](https://twitter.com/CIVICUSespanol)

OFICINA CENTRAL
25 OWL STREET, 6TO PISO
JOHANNESBURGO, 2092
SUDÁFRICA
TEL: +27 (0)11 833 5959
FAX: +27 (0)11 833 7997

CENTRO ONU: NUEVA YORK
WE WORK
450 LEXINGTON AVE,
NEW YORK, NY, 10017
ESTADOS UNIDOS

CENTRO ONU: GINEBRA
11 AVENUE DE LA PAIX
GINEBRA, CH-1202
SUIZA
TEL: +41 (0)22 733 3435